

LA INMIGRACION PARAGUAYA Y BOLIVIANA EN EL NORTE DE LOMAS DE ZAMORA DURANTE LOS ULTIMOS VEINTE AÑOS

Jorge Luis OSSONA (CEHP/ UNSAM-CEINLADI-FCE-UBA)

Trabajo Presentado como Ponencia en el Sexto Congreso del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina (CEISAL) “Independencias- Dependencias-Interdependencias” desarrolladas en la Universidad de Toulouse-Le Mirail, Francia, entre el 30 de junio y el 3 de Julio de 2010.

INTRODUCCION

Las migraciones hacia la Argentina procedentes de los países limítrofes constituyen un fenómeno histórico tan antiguo como la historia del país. No obstante, desde la segunda mitad del siglo XX, estas se aceleraron según ritmos definidos por las coyunturas políticas y económicas tanto de los países expulsores como del huésped. Entre fines de los años 50 y mediados de los 70 los contingentes fueron correlativos a la expansión “desarrollista”, por así llamarla, y a las volátiles contingencias políticas de Bolivia, Paraguay, Uruguay; y en menor medida, Chile. Luego, sobrevino un letargo de casi dos décadas en cuyo interín la Argentina experimentó una reestructuración económica y social sin precedentes desde el auge primario exportador detonado a fines del siglo XIX. La estabilización, primero, y las expansiones económicas intermitentes de los últimos veinte años habrían de devolverle a esos flujos un vigor redoblado que debe ser inscripto en el marco de la Globalización, la integración regional definida por el MERCOSUR, y las transiciones democráticas de los distintos países. De todos modos, los contingentes contemporáneos reúnen especificidades que resultan interesantes de indagar tanto en el plano económico como sociocultural y espacial. Este trabajo procura abordar estas cuestiones circunscribiéndose a los casos de los inmigrantes procedentes de Paraguay y Bolivia radicados en el límite entre el partido bonaerense de Lomas de Zamora y la Capital Federal. Es el resultado de una tarea etnográfica concentrada en las zonas pobladas compulsivamente del distrito lomense desde principios de los años 80. Nos proponemos, a tales efectos, comprender la dinámica de esos flujos migratorios sobre la base de sus actividades económicas y de sus respectivas organizaciones sociopolíticas en relación a la evolución económica general del país de recepción, y de los caracteres de su sistema político a partir del restablecimiento de las instituciones democráticas a partir de 1983

Si bien es cierto que los contingentes procedentes de Bolivia y Paraguay han tendido a radicarse en distintas economías regionales del país, también lo es que en su mayor parte lo hicieron en el cordón industrial del Gran Buenos Aires. Esa tendencia, observable a lo largo de todo el siglo XX, se tornó terminante desde el ciclo comenzado en la década de 1990. Coincidió, entonces, con la desorganización económica y social del país industrial que, comenzada a mediados de los 70, no hizo más que acentuarse a lo largo de los treinta años

ulteriores. Los nuevos inmigrantes, entonces, confluyeron en sus zonas de radicación con sectores populares locales afectados por toda una serie de fenómenos económicos, sociales, y culturales como el avance de las actividades informales, la nueva pobreza suburbana, y la juvenilización cultural, la crisis de las formas de intervención estatal configuradas por el peronismo histórico, y los nuevos criterios territoriales de construcción de aparatos electorales.

Uno de los fenómenos extendidos en los contornos populares urbanos y suburbanos ya desde las postrimerías de la última dictadura militar, pero sobre todo a lo largo de la transición y consolidación democráticas fueron las tomas compulsivas de tierras vacías públicas o privadas con fines fundamentalmente habitacionales. Generalmente, estas ocupaciones tuvieron lugar en zonas bajas inundables y, por lo tanto, no adecuadas para su habitabilidad sin su eventual adecuación ecológica e infraestructural. Un poco la desesperación, y otro poco la especulación política intensificaron el fenómeno durante la primera década democrática. En la segunda, en cambio, las autoridades gubernamentales trataron de ponerle coto habida cuenta de convertirse en una de las actividades más rentables de una economía informal de connotaciones culturales propias distinguidas de los mercados formales.

Los inmigrantes paraguayos y bolivianos llegados al país durante los años 90 lo hicieron sobre la base de la gravitación de actividades que cobraron auge a raíz de la estabilización lograda a comienzos de esa década como la construcción, en primer término; y las actividades comerciales e industriales dedicadas a la falsificación de marcas registradas. Mientras que los paraguayos se localizaron en la primera; bolivianos, y en menor medida, peruanos lo hicieron en torno de estas últimas. Así, mientras que los flujos de origen guaraní fueron más intensos durante los 90; los del altiplano lo fueron desde la recuperación económica de 2002 luego del *intermezzo* de más de tres años definido por la crisis de la Convertibilidad. De todos modos, ambas corrientes estuvieron facilitadas por, además de los factores antes citados, por otros como la crisis de sus redes de recepción y contención primigenias de sus compatriotas -debido a la saturación espacial- y las dificultades para acceder a las nuevas tierras ocupadas ofrecida por las organizaciones sociales y políticas de los sectores populares bonaerenses no exentas, en muchos casos, de redoblados reflejos xenofóbicos.

LOS INMIGRANTES PARAGUAYOS

Auge y crisis de la industrialización desarrollista, y “antistronismo”

La periferia lomense recostada en la cuenca del Río Matanza-Riachuelo que delimita por el sur a la Capital con el Gran Buenos Aires venía atrayendo inmigrantes procedentes de ambos países limítrofes desde los años 60, preferencialmente en Villa Fiorito, en el caso de los paraguayos; y en Ing. Budge, en el de los bolivianos. Si bien el impulso industrial desarrollista constituyó el factor más importante; las condiciones políticas de sus países no le fueron a la zaga. En el caso paraguayo lo fue, sin duda, el carácter represivo y excluyente de la oposición del régimen del gral. Alfredo Stroessner. Los núcleos guaraníes ocuparon silenciosamente tierras bajas alrededor del centro del pueblo de Fiorito procurando, simultáneamente, acondicionarlas mediante una ciclópica tarea de rellenado. Ello fue posible mediante instituciones sociales que, detrás de una fachada deportiva o fomentista,

enmascaraban clubes de militantes de los distintos partidos políticos opositores al “stronismo”. Estas organizaciones conjugaban formas diferenciadas de militancia política con tradiciones culturales mas profundas que no vamos a detallar aquí, arraigadas en las profundidades rurales del Paraguay. Las tendencias expulsivas del gobierno militar del gral. Onganía -en sintonía ideológica con su vecino- determinaron que estos grupos encontrarán refugio en la Iglesia Católica, francamente distante respecto del régimen paraguayo. Se conformaron, así, redes que terminaron estableciéndose definitivamente debido tanto a la naturalización de la generación de sus hijos como a su asimilación respecto de argentinos procedentes de los distritos mesopotámicos que percibían a sus vecinos como una versión extrema de la inmigración litoraleña. Los matrimonios mixtos y las militancias de los primeros 70 consolidaron su radicación a lo largo del resto de esa década y de la siguiente.

Los nuevos inmigrantes llegados desde principios de los 90 encontraron en sus parientes ya establecidos una referencia coordinada menos por los partidos que por la Iglesia. Pero el corte cultural entre viejos y nuevos y la crisis habitacional que la nueva corriente suscitó intensificaron conflictos de muy difícil resolución. El tipo de cambio favorable definido por la convertibilidad redoblo la gravitación inmigratoria; aproximando a algunos de sus exponentes exitosos a las actividades de bandas delictivas locales vinculadas con el robo de vehículos exportables al Paraguay y con el tráfico de marihuana. Los intereses electorales de los cuadros políticos municipales, asimismo, tendieron a forzar su naturalización a los efectos de su utilización electoral. Uno y otro factor les permitió a algunas familias abrirse espacios en los nuevos asentamientos mediante la compra de tierras ofrecidas por el nuevo elenco de improvisados especuladores inmobiliarios localizados en la política de base; en la comunal; y en las diversas bandas delictivas. Pero aun así, los recién llegados solieron ser objeto de estafas y expoliaciones humillantes impulsadas por la xenofobia local que, en no pocas ocasiones, terminaban con su expulsión misma de los terrenos adquiridos. Las cosas cambiaron, sin embargo, a raíz del derrumbe del régimen “stronista” en 1989. Como en los 60, la política volvería a teñir los contornos de los inmigrantes paraguayos; aunque, esta vez, en un sentido inverso.

Transición democrática, empleo informal, delito, y estrategias de ocupación territorial

La nueva generación “stronista”

Durante la etapa final de su gestión la dictadura paraguaya debió hacer frente a toda una serie de cuestionamientos radicados tanto en la capital como en los pueblos del interior. Habida cuenta de que la oposición mas solidamente fundada se hallaba en Asunción -tanto dentro como fuera del Partido Colorado- el régimen opero en dos sentidos: acentuó el autoritarismo sobre las pequeñas comunidades mediante referentes de base encargados de vigilar y disciplinar sus distritos para evitar la predica de grupos antagónicos; y reforzó, mediante la asociación de estos últimos con las fuerzas de seguridad, los controles sobre las vías de comunicación para cortocircuitar a la capital respecto del interior y de sus densos conglomerados pobres periféricos. Esta generación final de cuadros políticos colorados fue dotada, entonces, de poderosos arsenales y de sofisticados equipos de comunicación, asociándose con las fuerzas estatales en negocios ilegales como la importación de coches de Brasil y la Argentina y el contrabando de armas fabricadas en el primero. Cuando el régimen, finalmente, se desmorono; la mayoría, temiendo represalias, se exilio, en la Argentina. Sus contactos estatales, asimismo, les habilitaron vínculos con

colegas del país vecino; que, a su vez, los reprodujeron con otros exponentes de la política local.

Las actividades de la construcción y el robo de vehículos

No obstante, estos individuos de entre treinta y cuarenta años debieron activar sus contactos familiares para ser recibidos de alguna manera en el país de destino. Ya por entonces, algunos inmigrantes de esa generación o de la anterior habían logrado escalar posiciones como contratistas de mano de obra informal de grandes empresas constructoras fuertemente conectadas con dirigentes políticos debido a tratarse de obras que requerían de autorizaciones especiales. Estos los habilitaron a trabajar como albañiles y pintores procurando su afianzamiento para traer, luego, en sucesivos contingentes, a sus respectivas clientelas familiares y políticas. Pero sus relaciones con las fuerzas de seguridad de su país les habilitaron también, en muchos casos, contactos con bandas locales dedicadas al robo de automotores muy demandados bajo la forma de partes en Paraguay. En lapsos relativamente breves, algunos de estos referentes lograron acumular un capital como para diversificar sus actividades. Las bandas locales, por su parte, los conectaron con fuerzas de seguridad y con políticos que también les requirieron tareas tales como el tráfico de marihuana o sustracciones previamente negociadas de vehículos de alta gama de funcionarios locales para que estos pudieran cobrar los seguros y obtener otros más actualizados. Los coches eran después vendidos a precios más reducidos que los de mercado, casi siempre, a exponentes de la elite política paraguaya.

La especulación inmobiliaria y la estrategia territorial

Pero el afianzamiento de sus actividades requería del acceso al mercado informal de tierras en asentamientos de ocupación reciente; cuestión que era resistida por los burocratizados dirigentes barriales por temor a su capacidad movilizadora y a su poder de fuego. El clima deliberativo en el que se sumió el peronismo a partir de las reelecciones de 1995 hizo lo demás. Hacia la segunda mitad de la década, las luchas facciosas motivaron una nueva ola de ocupaciones territoriales una vía para configurar clientelas cruciales en la definición elecciones internas y generales. En Villa Fiorito, una sucesión de tomas violentas tuvo por protagonistas a bandas de especuladores inmobiliarios asociados con muchos otros delitos que operaban, además, como fuerzas de choque de referentes barriales o políticos peronistas resentidos por los rigores de los encuadramientos municipales y provinciales del duhaldismo. Muchos de estos se sumaron a la coalición opositora que se fraguó hacia fines de 1997, y que ganó las legislativas de ese año; posicionándose como una eventual alternativa a los peronismos oficiales en las elecciones nacionales a celebrarse dos años más tarde. Comenzó, entonces, un proceso de movilizaciones y de tomas muy violentas en cuyos pliegues la nueva camada de dirigentes “stronistas” exiliados logró hacerse de los apetecidos territorios por los que pagaban sumas muy remunerativas para poder, luego, radicar a sus clientelas residentes en Paraguay.

No obstante, para evitar nuevas expoliaciones de sus socios locales debieron, también ellos, definir una “estrategia territorial” consistente en configurar en la periferia de los

nuevos asentamientos guetos densamente poblados por sus seguidores –que en la mayoría de los casos no eran sino distintas líneas emparentadas- protegidos por poderosos y sofisticados arsenales; y comunicados entre si por los modernos sistemas de comunicaciones que les había provisto el “stronismo” en su etapa póstuma. Sin dejar de reconocer a los líderes de base de la política territorial peronista, convirtieron a la mayoría de los nuevos asentamientos en federaciones argentino-paraguayas cuyas abigarradas secciones inmigrantes estuvieron vinculadas entre si según una estrategia de cadenas de “periferias de las periferias”. Desde La Matanza hasta Valentín Alsina los nuevos jefes paraguayos constituyeron una red de zonas recostadas sobre la costa del Río Matanza-Riachuelo convirtiendo al camino ribereño su columna vertebral. Sus anónimos jefes - reconocidos por los líderes barriales y coordinadores de base como “los amigos del Coronel”- eran, de todos modos, casi siempre varios que rotaban en función de los cada vez más frecuentes viajes a Paraguay desde donde traían marihuana y nuevos contingentes humanos.¹ Para los políticos barriales comprometidos con la urbanización de sus asentamientos negociar con estos liderazgos difusos constituyo una cuestión problemática habida cuenta de su poder de fuego y de sus contactos cada vez mas aceitados con la policía y con el poder político. En pocos años, sin embargo, los guetos paraguayos lograron “hacerse respetar” imponiendo en sus jurisdicciones respectivas un verdadero régimen militar que no solo sancionaba duramente los enfrentamientos internos sino también las presiones de bandas -muchas veces organizados por competidores de sus patrocinantes políticos y barriales- así como de improvisados delincuentes juveniles. A la manera de castigos ejemplares, muchos de estos fueron ejecutados en actos públicos luego de informales juicios sumarísimos; exponiendo luego los cadáveres durante varios días atados a postes de luz, y suscitando la reacción adversa de sus solo virtuales jefes barriales argentinos.

El tráfico de marihuana

Los guetos paraguayos no tardaron en distinguirse respecto del resto de la comunidad, sobre todo de sus pares argentinos. Si bien algunos de estos últimos habían avanzado -y mucho- en las tareas de urbanización de sus barrios; los paraguayos siempre corrían con la ventaja de su numero, de su disciplina, y de sus vínculos con las actividades de la construcción. Montaron, así, viviendas de hasta tres pisos para atraer mayores números de compatriotas y conchabarlos en las empresas constructoras. Protagonizaron, entonces, una nueva vertiente del negocio inmobiliario informal dedicándose, asimismo, al alquiler de habitaciones para contingentes ya no necesariamente emparentados o relacionados que llegaban espontáneamente sabiendo que no debían de recurrir al auxilio de familiares para sentar sus bases en el país de recepción. Simultáneamente, las zonas paraguayas se convirtieron en centros mayoristas de provisión de marihuana comprada por *dealers* locales asociados, casi siempre, al poder político y a la cultura de la noche de los grandes centros urbanos. Construcción, robo de vehículos, tráfico de *cannabis*, y tierras fueron la base de estos negocios en los que confluían con bandas y políticos locales por la vía de las más complejas redes. Culturalmente ultraconservadores, procuraron, preservar al pie de la

¹ Utilizamos este término para denominar, provisoriamente, a estos jefes porque así han coincidido en referirse a ellos varios referentes barriales y dirigentes políticos de Lomas de Zamora. Otras denominaciones son “caciques”, ó la mas vernácula –compartida por las jefaturas barriales mas compulsivas, de “porongas”.

letra el uso del idioma guaraní en la vida cotidiana, así como la interdicción de los matrimonios entre hombres y mujeres argentinas; promoviendo, como contrapartida, los casamientos mixtos para las mujeres de manera de estrechar vínculos controlados con las sociedades argentinas.

La prostitución

Llegados a este punto, cabría añadir otra actividad que, no obstante, debe ser interpretada en términos subculturales. Como el peso específico de las mujeres en las comunidades paraguayas siempre supero numéricamente a los hombres, las pujas dentro de los clanes fue un problema crónico en Paraguay que, obviamente, se traslado a la Argentina. Si los guetos paraguayos nunca registraron caudillismos unipersonales sino más bien liderazgos colegiados entre los jefes de los clanes, detrás de su autoridad debía negociarse con la primera línea de “matronas” convertidas en depositarias y garantes de las tradiciones. Eran éstas quienes vertebraban parejas y matrimonios para evitar las pujas internas. Estas mujeres, asimismo, encontraron en la prostitución una vía de control social por ellas organizada y solo gerenciala por hombres; actividad que no tardo en convertirse en un negocio a la par de los anteriores. Las jóvenes que sobraban en Paraguay o en la Argentina fueron localizadas en prostíbulos que, estratégicamente, se montaron en barrios que recibían afluencias cotidianas masivas como Liniers, Flores, y Constitución debido a la predilección de los consumidores populares locales admiradores de sus bellezas adolescentes ajustadas a los cánones estéticos de las provincias litoraleñas. El negocio no tardo en diversificarse al abrirse nuevos locales informales en el conurbano bonaerense en cuyos lucros se asociaban la policía y los políticos comunales, asiduos usuarios de sus servicios. Las más bellas, incluso, eran arrendadas a regentes que las ubicaban en departamentos privados en el centro de la Capital o en el barrio del Once. Las mitológicas “paraguayitas”, en muchos casos menores de edad, se convirtieron en la versión finisecular de las “polaquitas” de la Zwi Migdal cien años antes. Las menos agraciadas, en cambio, se dedicaron a una subprostitución local de usuarios de las barriadas aledañas a los guetos; ejerciendo su oficio en sus lugares de residencia, o acudiendo a la demanda de clientes populares que aprovechaban la ausencia de sus mujeres trabajando para recurrir a su servicio difícil de disimular en las abigarradas comunidades populares.

Los vínculos con los poderes barriales locales

En la zona de Villa Fiorito, en la que se radico nuestro trabajo etnográfico, hasta el día de hoy “los amigos del coronel” ejercen una poderosa influencia; aunque circunscriptos a núcleos cautivos reducidos y localizados en los guetos. Estos perdieron su concentración primigenia por obra de los matrimonios mixtos que rápidamente naturalizaban a sus hijos. El cumplimiento riguroso de los compromisos con los jefes territoriales barriales de los códigos de convivencia los fueron tornando cada vez más tolerables; aunque los reflejos xenófobos siguen existiendo matizados, en el caso de los paraguayos, por su ofensividad militar comprobada fehacientemente durante la crisis de diciembre de 2001. Cuando luego de los saqueos de los centros suburbanos se corrió el rumor de ataques de barrios vecinos, los jefes barriales recurrieron a sus “subordinados” paraguayos quienes tuvieron, entonces, la oportunidad de exhibir sus arsenales mediante de armas sofisticadas. No obstante, la importación clandestina de armas desde Brasil constituye una actividad absolutamente

marginal debido a las impugnaciones de las fuerzas de seguridad locales. Estas, toleran su tráfico solo en cantidades reducidas para su comercialización con superbandas; aunque su uso principal sigue siendo principalmente la defensa de sus comunidades. La compra, venta y alquiler de armas de fuego, en cambio, es un negocio de bandas y jefaturas territoriales de origen local.

Calcular el número de pobladores cautivos en los barrios paraguayos es muy difícil; pero todo hace pensar que no ha de superar el 20 % de esa comunidad de inmigrantes. Ser trata, en su mayoría, de recién llegados que, luego de un “derecho de piso” de uno o dos años, logran su autonomía mudándose a barrios en donde alquilan o compran viviendas en el citado mercado marginal, o bien retornan a su país con un pequeño capital que destinan a la compra de terrenos o al montaje de pequeños comercios en sus localidades originarias. Los “capos”, mientras tanto, siguen siendo elencos inabordables debido a las rigurosas normas impuestas a sus connacionales; y por su gran volatilidad en el interior de los clanes. De todos modos, según varios entrevistados, “los amigos del coronel” ya se han reinsertado en el Paraguay “poststronista” en donde también diversificaron sus propiedades mediante la compra de tierras dedicadas a cultivos legales o de cannabis; luego, comercializado mayormente en la Argentina. Sus mitológicas fortunas, sin embargo, se reducen a algunas decenas de hectáreas y a locales alquilados en sus pueblos de origen o en la capital; aunque algunos también extendieron sus negocios prostibularios a las grandes ciudades del Litoral en camino del país vecino. Allí también poseen socios menores que les dan eventual refugio ante persecuciones policiales o de gendarmería que, en la mayoría de los casos, luego se resuelven mediante aportes en dinero.

Sus vínculos con los peruanos y bolivianos también concentrados en asentamientos cuyo eje gira en torno del ramal Belgrano Centro que une Valentín Alsina con González Catan son tensos pero fluidos; cosa que les permite participar- aunque subordinadamente- en el negocio de la venta de cocaína y “paco”, autorizando a sus pares a instalar “cocinas” en los guetos paraguayos que, de todos modos, no abundan por temor a ataques y represalias.² Como contrapartida, los paraguayos ponen a disposición de sus colegas del Altiplano mano de obra para las ferias y, eventualmente, para las actividades textiles clandestinas. Ello los habilita a comprar, arrendar o subarrendar puestos en las nutridas ferias de La Salada. La rentabilidad superlativa de la cocaína de origen andino respecto de la marihuana paraguaya genera temores de rupturas puntuales de pactos entre unos y otros en la zona de vecina de Ing. Budge que podrían generar, en los próximos años, pequeñas guerras localizadas pero muy sangrientas y poco controlables por las fuerzas de seguridad de los Estados nacional y provincial.

LOS INMIGRANTES BOLIVIVIANOS

La Feria de La Salada: capital internacional del comercio ilegal

² Denomínase así en la jerga juvenil y de los *dealers* al residuo de la producción del clorhidrato de cocaína que, mezclado con otros elementos tóxicos, los traficantes comercializan entre los jóvenes de los barrios populares; aunque, durante los últimos años su consumo ha alcanzado también a las clases medias. “Cocinas”, por su parte, es la denominación que reciben los improvisados laboratorios en donde se prepara y fracciona la cocaína que, luego, se vende en los grandes centros urbanos, o que se exporta a Europa.

La inmigración boliviana en el Cuartel IX del partido de Lomas de Zamora tendió a concentrarse menos en Villa Fiorito que en su vecina occidental de Ing. Budge; también lindante con la Capital por el norte y con La Matanza y Esteban Echeverría por el Oeste. Como los paraguayos en Fiorito, esa comunidad estableció sus primeras bases en los 60 debido al influjo desarrollista; deteniéndose en la década siguiente hasta principios de los 90 cuando se volvieron a intensificar los movimientos poblacionales. A diferencia de los paraguayos, esta colectividad registra una sociabilidad más consensuada y menos gregaria que facilita la convivencia, y requiere de un menor ejercicio de la fuerza. Sus jefes ejercen una autoridad paternalista benevolente, concebida como natural; aunque aun así, muy rigurosa en cuanto a su obedecibilidad. Toda una red de mutuales, cooperativas, y asociaciones vecinales configuran un entramado social muy denso en estrecha dependencia respecto de sus mandantes territoriales y políticos argentinos que los someten a humillaciones mucho mayores que a los paraguayos por concebirlos terminante y despectivamente como extranjeros. No obstante, su asociación en sus lucros es mucho más estrecha y parasitaria; aunque, como contrapartida, estos parecen ser mucho más contundentes respecto de los de los guaraníes. La dinámica de la inmigración boliviana está bien representada por el fenómeno de las ferias comunitarias de La Salada.

Hacia 1991, quince familias bolivianas de Ing. Budge, en el extremo noroeste de Lomas de Zamora –reproduciendo a las ferias típicas de su país; un fenómeno incipiente que desde hacía algunos años se estaba desarrollando en torno del Mercado Central de Frutas y Verduras- se unieron en la cooperativa *Urkuipiña*, y se lanzaron a vender a sus vecinos ropa y calzado. Fabricada en sus propios talleres, esta producción imitaba a las grandes marcas; aunque se ofrecía a precios tan increíblemente bajos que no tardó en congregarse a un público comprador procedente de otros barrios periféricos, en principio, de la zona sur del Conurbano y de la Capital Federal. En el curso de poco menos de dos décadas, ese pequeño emprendimiento devino en enorme complejo comercial de tres centros en los que los bolivianos y peruanos han debido convivir y hasta asociarse con capitalistas y referentes argentinos estrechamente vinculados a la política y al empresariado local. A la par de *Urkuipiña* surgieron Punta Mogotes y Ocean, edificadas sobre los antiguos piletones de agua salada curativa procedente de un canal subterráneo debajo de la cuenca del Río Matanza- Riachuelo, cerrados hacia fines de los 60 por su contaminación. Las tres ferias movilizan, actualmente, quinientos millones de dólares semanales, ofrecen empleo directo a unos seis mil trabajadores de diversas nacionalidades; y son visitadas por dos millones de personas al mes procedentes de todo el país y de naciones limítrofes. Este “símbolo del comercio de mercadería falsificada en el mundo”, según las autoridades de la Unión Europea, mide un producto bruto mucho mayor que el de toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; configurándose como una verdadera capital internacional de la economía informal. Pero este caótico mundo de puesteros, vendedores ambulantes, carreros -que trasladan la mercadería-, y de compradores mayoristas y minoristas constituye solo la cara visible de un universo mucho más vasto en el que confluyen varios fenómenos de la pobreza urbana y suburbana.

La trastienda de la actividad comercial: falsificación de textiles y narcotráfico

La Salada y sus ferias tributarias distribuidas en todo el país son las terminales de la cadena de valor agregado que compone el heteróclito complejo productivo textil sobreviviente de la reestructuración económica de los últimos treinta años, así como de un

comercio internacional ilegal a escala planetaria. Hemos ahí, entonces, las modalidades de inserción de los inmigrantes bolivianos y peruanos ya desde los 90; aunque reforzadas luego de 2002 a raíz del sesgo del giro emprendido por la política económica del peronismo en su segunda versión durante la nueva era democrática. La dependencia mayor de la comunidad boliviana respecto de políticos y referentes territoriales locales de Ing. Budge determino la necesidad de tolerar socios locales que, luego, terminaron dominando tanto el negocio como a sus ramas adventicias. No obstante, durante los últimos años, los liderazgos del Altiplano están refortaleciéndose por vías menos rústicas que el militarismo de los paraguayos, al punto que en un futuro cercano podría llegar a configurar sutiles poderes de alcances insospechados. La presencia de nutridos contingentes migratorios en los multitudinarios asentamientos erigidos durante los últimos años en Budge como en Villa Albertina -y aun en Villa Fiorito-; y la emergencia de empresarios que efectúan un control contundente de las comunidades extranjeras en general mediante el dominio de medios masivos de comunicación, así parece testimoniarlo.³ Es difícil saber cual de las actividades en las que se insertaron los inmigrantes del Altiplano es la que ofrece mayor rentabilidad. Para estas, la producción de textiles falsificados constituye el equivalente de la construcción para los paraguayos. Pero mientras que para las jefaturas de estos últimos el tráfico de marihuana es solo un negocio colateral subordinado; es dudoso que para sus pares bolivianos y peruanos el de la pasta base de la cocaína ocupe un lugar equivalente. Algunos, incluso han llegado a interpretar que las actividades comerciales de las Ferias son una mera fachada para el lavado de dinero procedente del tráfico internacional de estupefacientes en manos de capos peruanos y bolivianos estrechamente asociados con grupos locales.

La asociación de los inmigrantes andinos con referentes locales se ve de una manera particularmente nítida en el circuito de la actividad textil clandestina en la que se describe, incluso, una verdadera división de tareas bien patente a partir de los 2000. Confluyen allí el clásico trabajo domiciliario predominantemente femenino, un conjunto heterogéneo de pequeñas y medianas plantas industriales que ocupan mano de obra “en negro”; y talleres clandestinos que incorporan a trabajadores semiesclavizados procedentes de los circuitos de trata de inmigrantes, en su mayoría, bolivianos. Mientras que los primeros son controlados mayormente por empresarios argentinos estrechamente asociados con punteros políticos; en los últimos predominan -aunque tampoco excluyentemente- bolivianos y peruanos. La robustez del negocio queda evidenciada por el hecho de que su marginalidad informal no circula del todo por fuera de la economía legal. Lejos de configurar una “economía autónoma” esta conectada a esta última a través de distintos hilos, no obstante, clandestinos.

Por último, La Salada constituye un fenómeno político porque detrás del anárquico escenario puesto en escena dos veces por semana a altas horas de la madrugada se oculta – como en otros fenómenos emergentes de la nueva pobreza- una micropolítica férreamente administrada y disciplinada por caudillos-administradores. Estos registran complejos vínculos con las distintas jurisdicciones de un Estado que también exhibe dos caras: una formal y otra informal; relativa, esta última, a los intereses de las corporaciones políticas

³ Como ejemplo de ello, valga el caso de un médico peruano referente de una radio ilegal, una mega bailanta y dos canales de televisión exclusivos para bolivianos, peruanos y paraguayos cuya refinada programación abarca a buena parte de la zona sur del Gran Buenos Aires. De hecho, los estudios de estos no se hallan en Lomas de Zamora sino en el en su flanco sudoccidental del vecino partido de Esteban Echeverría.

encadenadas que lo ocupan. A lo largo de sus casi veinte años, el polo socioeconómico de Ing. Budge logro tallarse un espacio en el corazón del Gran Buenos Aires merced a la aquiescencia de autoridades publicas entre perplejas e interesadas en capitalizar a su favor - política y materialmente- este caso paradigmático de la nueva realidad social de la Argentina contemporánea. En medio de legislaciones anacrónicas y contradictorias -cuando no lisa y llanamente ausentes-; las delegaciones de facultades entre jurisdicciones -y aun dentro de cada una de ellas-; y la superposición de atribuciones -y la consiguiente feudalización de áreas administrativa- los referentes de La Salada han sobrevivido merced a una trama de complicidades con jueces, políticos, policías e inspectores, por arriba; y con punteros, lideres comunitarios, y organizaciones delictivas de diferentes especialidades, por abajo. Como contrapartida, el complejo cuenta con una policía propia con su comisaría respectiva; dos periódicos; una emisora radial de amplitud modulada, una delegación de inmigraciones, y una fiscalía con capacidad judicial. Su arraigo en la red de comunidades barriales periféricas esta soldado por toda una serie de funciones subsidiarias que abarcan desde comedores infantiles hasta un centro sanitario y un club deportivo. El predominio de referentes argentinos ya hacia fines de los 90 supuso el aplastamiento de los últimos intentos de autonomía por parte de los bolivianos pioneros de *Urkupiña*. La detención de su administrador en 2001 y su posterior asesinato en prisión determinaron que, sin dejar de estar controlada por connacionales, esa feria debió sintonizar mejor con las demás; particularmente, con la más poderosa.

La producción textil clandestina

Volvamos, a continuación, al “*core business*” comercial de la inmigración boliviana encarnada en la feria primigenia en las otras dos que la secundaron. Debajo de él, subyace todo un circuito de ilegalidad de complejos contornos y de actores como los vinculados a la producción de mercadería falsificada a instancias de formas precapitalistas de explotación; el contrabando; y el robo liso y llano de transportes mas reconocido como “piratería del asfalto”. Este espectro de ilegalidad se articula con la configuración estamental antes descrita de las ferias de acuerdo, incluso, a una cierta diferenciación de tareas. Así, mientras que las tres principales ferias priorizan la importación ilegal procedente, fundamentalmente, del Paraguay; la “piratería del asfalto”; y, luego, la producción en talleres informales familiares; la “Feria de la Ribera” y las intermedias se especializan en la venta de productos procedentes de pequeños talleres y fabricas clandestinas no registradas ubicadas en su inmediata periferia barrial , aunque también de otras zonas del Conurbano bonaerense y barrios de la zona sur de la Capital Federal de acuerdo a una intrincada y compleja madeja de intereses que involucra a los “administradores” con los propietarios de las plantas, punteros políticos, jueces, autoridades comunales, fuerzas policiales y empresarios especializados en la trata de contingentes migratorios procedentes de Bolivia y Perú.

No habremos de detenernos sino solo en una de las “caras ocultas” de La Salada: la que involucra mayormente a la inmigración peruana y boliviana; esto es, el “Hinterland” de talleres y fabricas textiles clandestinas que operan con mano de obra de esa procedencia traída mediante modalidades de trata humana equivalentes a los de los tiempos de la esclavitud. Omitiremos, entonces, el recorrido de los productos procedentes de la importación ilegal; y solo mencionaremos al pasar las formas productivas dominadas por referentes locales como el trabajo domiciliario “a facon”, y los talleres clandestinos que

ocupan una fuerza informal pero mediante contratos verosímiles respecto a los del mercado formal. Solo apuntaremos que, en el primer caso, predomina la explotación de mano de obra femenina domiciliaria localizados, en el caso de La Salada, en las barriadas periféricas de Ing. Budge. Estas mujeres, que pueden llegar a pasar hasta dieciséis horas diarias al frente de sus máquinas de coser en pésimas condiciones de salubridad aportando su propio capital de trabajo son, en su mayoría, argentinas; y describen fuertes vínculos menos con los “administradores” que con dirigentes barriales a ellos asociados. El entramado se completaría con un estamento de pequeñas plantas que emplean una mano de obra “en negro”; no obstante, en mejores condiciones retributivas que los anteriores, y que no aportan su capital de trabajo.

El eje principal de la mercadería falsificada que se comercia en La Salada, sin embargo, procede de su producción clandestina en el país; actividad que, durante los últimos quince años –aunque muy particularmente en la actual década- se ha perfeccionado en calidad y simulación. En el caso de la indumentaria, miles de talleres irregulares ocupan a inmigrantes indocumentados; a veces, junto con sus respectivas familias, incluyendo hijos menores de edad. El complejo comercial de La Salada, en ese sentido, expresa una suerte de ecosistema, uno de cuyos aspectos centrales es la inmigración y el trabajo ilegal a destajo.⁴ La mayoría de estos obreros trabajan a lo largo de prolongadas jornadas que pueden llegar a sumar hasta veinte horas; algunos mediante el denominado sistema de “cama caliente” consistente en residir hacinadamente con otros trabajadores en el mismo taller. Este sistema de producción se asienta en el tráfico de personas indocumentadas procedentes de Bolivia. Hemos ahí una de las formas de organización de la inmigración andina desde los años 90, acentuada durante los 2000, mucho más rigurosa que la de los paraguayos.

La neoesclavitud boliviana

Reclutamiento y traslado

La mayor parte de los inmigrantes proceden del sur de Bolivia en donde son captados mediante avisos publicitarios en medios de escala local que pueden ser programas de radio, o bien pedidos en periódicos y en tiendas o almacenes. Ocurre que, muchas veces, los tratantes reclutan la mano de obra en su propia red social cuyos miembros llegan a competir por ser trasladados a Buenos Aires o a otros puntos de este país debido al imaginario de prosperidad y de posibilidades de ascenso que este suscita. En estos últimos casos, el reclutamiento suele formularse a través de “radiopasillos” o de información “boca a boca” en aldeas y pueblos. La figura del “pariente emisario”, en ese sentido, resulta crucial; sobre todo en comunidades rurales o semirurales en las que ni siquiera se habla el idioma español, sino el aymara y el quechua.⁵ Aquellos finalmente escogidos son cargados en precarios micros o camiones que los transportan hasta la frontera cuyo paso constituye la etapa más crucial de la trata debido a que los referentes deben tener buenos contactos con las gendarmerías de ambos países a través del pago de comisiones. A veces, cuando su capitalización y experiencia son menores -o a los efectos de disminuir costos- los

⁴ Ver Carpio, Jorge; Klein, Emilio, y Novakovsky, Irene; *Informalidad y exclusión*. Buenos Aires. FCE-SIEMPRO, 2000.

⁵ Ver Grimson y Jelín, (2006); Op. Cit.

trabajadores son cruzados clandestinamente por inhóspitos caminos, solo reconocidos por los vaqueanos; o bien escondidos en vehículos de carga. Luego, se los suele alojar en albergues destinados a ellos en Jujuy, Salta o Tucumán; previo embarque en micros pertenecientes, casi siempre, a dos empresas: una argentina y la otra boliviana. El siguiente desafío son los sucesivos puestos policiales camineros en el camino a Buenos Aires para aquellos que aspiran a que se les asigne ese destino, que son la mayoría. Como se trata de contingentes indocumentados, los tratantes deben realizar allí nuevos aportes. Pero ¿quiénes son estos referentes y que lugar ocupan en las comunidades inmigratorias preestablecidas? Es un interrogante complejo que requiere de una penetración más profunda que la hasta el momento realizada en el complejo entramado de las disciplinarias relaciones de esas colectividades cuya cara visible son, como ya se ha señalado, un conjunto de cooperativas, asociaciones vecinales, clubes deportivos y mutuales en relación de dependencia mucho más directa que las difusas y compulsivas paraguayas -viejas y nuevas- respecto de los poderes de la política local. De todos modos, esta vertiente de esas comunidades suele vertebrar a parientes de los “talleristas” que, de esa manera, contratan su fuerza de trabajo directamente en sus pueblos o en áreas cercanas.

A los trabajadores se los provee de documentación falsificada o se les exige el pago del pasaje que luego se les descuenta de su trabajo en los talleres. A veces, incluso, les entrega el dinero para pagar el boleto o los trámites en la Dirección de Migraciones. Por cierto que al momento de ser elegidos se les asegura que la empresa se habrá de hacer cargo de todos los costos; pero luego, este compromiso es abiertamente burlado siendo, casi siempre, tolerado por víctimas sumisas acostumbradas a obedecer criterios de autoridad muy rigurosos en sus propias aldeas; y que, por lo tanto, reconocen de antemano esta regla de juego con una actitud ciertamente fatalista aspirando a compensarlo con creces merced al ascenso al que aspiran en la “ciudad luz”. A veces, el tráfico es encarado por los mismos “talleristas”; pero otras, estos contratan los servicios de tratantes más especializados que distribuyen contingentes más vastos en diferentes economías regionales argentinas. Como “los amigos del coronel” paraguayos, incluso, pueden brindar alojamiento provisorio a los inmigrantes en villas o asentamientos con grandes colonias de peruanos y bolivianos cuya fisiología trataremos más adelante. Pero, en este último caso, los inmigrantes “se la tienen que arreglar solos” ofreciéndose en grandes concentraciones matinales como la plaza principal de la villa 1-11-14, o la intersección de las avenidas Cobo y Curapaligüe, o de Olimpo y 9 de Julio en los barrios de Floresta en Ing. Budge respectivamente. Acuden allí a diario cientos de trabajadores que aspiran a ser conchabados por ser recién llegados, o por haber sido despedidos por los “talleristas” luego de “contrataciones”. Retornemos, a continuación, a estas últimas.

La reducción a la servidumbre

Los inmigrantes en relación de servidumbre permanecen durante meses prácticamente “atados” a las máquinas. Algunos cálculos estiman que este sector puede abarcar entre veinte mil y cincuenta mil personas solo en el Gran Buenos Aires distribuidos en unos diez mil talleres en todo el país.⁶ Constituyen el cincuenta por ciento de todos los trabajadores ocupados en la nueva cadena textil que se sustancia en locales herméticamente cerrados a los efectos de ocultar el tipo de explotación que se desarrolla en su interior. Los más grandes

⁶ Ver “Quien es quien...”, Fund. “El Otro”, Op. Cit.

pueden llegar a ocupar hasta cien personas, muchas de las cuales son familias enteras, incluyendo a sus hijos menores de edad; aunque también hay casos de hombres y mujeres solas o mujeres con sus hijos que permanecen encerrados en estrechas habitaciones todo el día. Los locales se dividen entre un área estrictamente laboral en donde se ubican las maquinas, y habitaciones contiguas o en pisos superiores en los que pueden llegar a dormir hasta veinte trabajadores apilados en camas marineras de tres pisos. Generalmente, solo existe un baño para compartir entre todos -hombres, mujeres y niños- que suele reducirse a una letrina. -

Estos trabajadores son alimentados por los propios “talleristas” con arreglo a regímenes diferentes; pero, en general, su dieta consiste en un frugal desayuno de café ligero o leche chocolatada y un pan; almuerzos y cenas de sopas de arroz con una papa, alguna ensalada, y, eventualmente, alguna porción de carne asada o al horno y algunas milanesas. Muchos talleres pueden estar controlados por cámaras televisivas las veinticuatro horas del día. No se les permite salir sino solo una vez por semana, e incluso, deben hacerlo acompañados por los “talleristas” o sus esposas quienes los vigilan estrictamente a los efectos de evitar fugas. El pago es por prenda y no por oficio, como lo establece el convenio; y se efectúa tanto mediante salarios exigüos que no alcanzan casi nunca los quinientos pesos, o vales que solo pueden utilizar los fines de semana en negocios vinculados a los costureros. Las sumas suelen ser aun más reducidas debido a que durante los primeros meses, suelen descontárseles los costos de traslado –pasajes, trámites aduaneros, comisiones pagadas en los puestos fronterizos a efectivos de la Gendarmería; o en las provincias a las policías, respectivas concupiscentes, no obstante, con los tratantes-. La imprecisión de las remuneraciones determina frecuentes deudas de los “talleristas” con sus trabajadores que estos casi nunca pagan debido a ser despedidos, a lo sumo, en plazos medianos de manera de contar con una mano de obra vulnerable en permanente proceso de rotación y circulación. Esta es proporcional a la inmigración procedente de los países limítrofes, en especial de Bolivia y de Perú; aunque también se han registrado contingentes menores de paraguayos, poco convenientes por ser menos dóciles y calificados que los del Altiplano.

Los contratos informales con estos trabajadores no quedan, obviamente, registrados; con lo que solo es posible reconstruirlos merced a los testimonios de aquellos que pasaron por esa experiencia, o bien por la documentación aportada por organizaciones mutuales que procuran -casi siempre infructuosamente- ejercer sobre ellos algún tipo de representación gremial.⁷ En algunos talleres, los costureros –sobre todo aquellos que quieren saldar sus deudas lo mas rápidamente posible para mejorar sus ingresos y enviarlos como remesas de sus parientes- pueden trabajar hasta dieciocho horas diarias, descansando de tres a cuatro horas a veces en colchones tendidos al lado de las maquinas. Algunos talleres reclutan familias enteras con el propósito de explotar a los niños. También se registran casos de contrataciones de adolescentes entre los doce y los diecisiete años entregados por sus propias madres a los “talleristas” para que trabajen en condición de pupilos de lunes a viernes.

⁷ En procura de limitar y hasta cierto punto controlar estos tipos de explotación laboral han aparecido diversas entidades como la “Fundación Alameda contra el trabajo esclavo. Asamblea popular y comedor comunitario” liderada por Gustavo Vera; la “Fundación “El Otro”, varios de cuyos trabajos han sido consultados para la realización de este informe; la Cámara Única de Trabajadores de Indumentaria, que nuclear a doscientos “talleristas” que poseen a sus trabajadores en regla y que presionan por que no se derogue la Ley N° 12713; y la Unión de Costureros de Buenos Aires.

Luego de no mas de seis meses, la mayoría de estos trabajadores suelen ser despedidos; y con la plusvalía adicional de beneficios de sus deudas impagas, algunos costureros compran nuevas maquinas; se diversifican hacia otras etapas de la producción; y eventualmente, instalan nuevos talleres. Pero, como se vera mas adelante, muchos de ellos no son propietarios puros sino socios menores; y, a veces, hasta meros empleados intermediarios también contratados por otros empresarios del complejo entramado de la nueva cadena textil. La insalubridad en estas barracas determina casos frecuentes de anemia o de tuberculosis. Las muertes en el ejercicio del trabajo son frecuentes; pero los talleristas y sus socios empresarios y estatales suelen ocultar muy bien las razones profundas. A las pésimas condiciones laborales se les suma un clima de opresión e intimidación abusando de la vulnerabilidad de personas, casi siempre, indocumentadas a los que se les amenaza con la deportación, su eventual entrega a las autoridades policiales por ilegales, e incluso a represalias a sus parientes en Bolivia, habida cuenta que los “talleristas” suelen ser también inmigrantes próximos a sus redes de pertenencia.

La red de talleres

Estos talleres, sin embargo, no solo están localizados en la periferia lomense, en donde mas bien los inmigrantes terminan registrando su residencia luego de este primer “derecho de piso”, sino también en zonas especialmente concentradas de la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Conurbano. En la Capital, son los barrios del sur, tradicionalmente asociados con una pobreza cuya marginalidad no ha hecho más que crecer durante los últimos treinta años. Por ello, abundan en casas particulares distribuidas en Flores, Floresta, Bajo Flores, Pompeya, Mataderos, Barracas, Villa Soldati, Villa Lugano; aunque también lo hacen en Once, Constitución, Villa Crespo, Caballito y La Paternal. En el Gran Buenos Aires, abundan en Ing. Budge -aunque de manera menos intensa que los talleres domiciliarios de mujeres “a facon”-; en Florencio Varela, Lanus y Avellaneda. Componen, así, una compleja red de contornos rizomáticos tributarios de las ferias La Salada.--

En torno de la identidad de los “talleristas” se trata, en su mayoría, de individuos o familias de nacionalidad boliviana; aunque también se registran algunos casos de coreanos, y aun de peruanos. Muchos bolivianos no son sino exponentes de un paradójal proceso de movilidad social por el que, habiendo comenzado como trabajadores serviles, luego ascienden mediante la inversión de sus ahorros en la compra de máquinas; aunque esos casos, en su mayoría proceden de un rendimiento destacado debidamente informado por “talleristas” a sus verdaderos jefes que son aquellas empresas mas grandes que, a su vez, los contratan como nuevos intermediarios.⁸ De todos modos, esta situación es solo una de las múltiples que configuran el mundo de los “costureros jefes”, por así llamarlos. En ese sentido, los hay mas o menos independientes, propietarios de sus maquinas; otros

⁸ Un caso resonante que puso de manifiesto públicamente los contornos de este sector de la economía informal fue el accidente ocurrido el 30 de marzo de 2006 en un taller localizado en la calle Luis Viale 1269 del barrio porteño de Caballito. Su incendio motivó la muerte de seis de sus sesenta y cuatro trabajadores indocumentados; cuatro de los cuales eran menores de edad, todos de nacionalidad boliviana. La fábrica era propiedad de Jaime Geiler y Daniel Fischberg quienes la subalquilaban a Juan Manuel Correa, de nacionalidad argentino, quien, a su vez, subcontrataron como costurero jefe al boliviano Sillerico.

asociados de manera directa respecto de otras capas superiores de la cadena textil; y , por ultimo, meros intermediarios tan a sueldo como sus trabajadores que, habiendo comenzado como ellos -al menos algunos-, se hallan mejor remunerados. Los mas autónomos pueden, incluso, proceder a la venta directa al menos de una parte de su producción en puestos en La Salada; sobre todo, en la denominada “Feria de la Ribera” o “boliviana” que es la mas informal, y la que vende en mayor medida este tipo de producto. Los más prósperos o eficientes, según su grado de dependencia, pueden poseer o regentar hasta varios talleres. Cada uno de estos, se especializan en distintas etapas del proceso de manufacturación; llegando, no pocos, a toda la confección e, incluso, a su embolsado. Estos son los que suelen tener puestos de venta directa en La Salada o en sus sucursales –llamadas las “Saladitas”- en donde atienden directamente a la clientela a través de parientes o miembros de su red social de pertenencia.⁹

Estos talleres suelen estar próximos entre si; pero deben ser lo suficientemente precarios como para su inmediato traslado ante requisas policiales o administrativas que, en el caso de la Capital Federal, son mas asiduas que en el Gran Buenos Aires; aunque casi siempre inducidas por competidores que procuran absorberlos en su red en detrimento de su autonomía, o de su compromiso con otro complejo industrial-comercial. Durante los últimos años, y debido menos a la mayor eficiencia de la acción estatal que a estas maniobras, varios cientos de talleres se han trasladado definitivamente al Gran Buenos Aires; generando en Ing. Budge, periferia de La Salada, una congestión que constituye uno de los impulsos –aunque no el único- de las ocupaciones territoriales masivas en zonas aledañas como las de 2008. En todos los casos, los “talleristas” no son sino meros intermediarios de empresas de mayor envergadura, algunas de las cuales ni siquiera tienen inserción directa en la producción; desempañándose como “marcas” que distribuyen la producción en locales mayoristas ubicados en La Salada o en otros centros importantes de acopio como los de Avenida Avellaneda en el barrio de Flores o el tradicional del Once. Otras, en cambio, como ya se lo señalara, poseen una presencia mas incisiva en el proceso productivo por ser los propietarios de las maquinas. Ello es dable de observar en los talleres más extensos dotados de varias; aunque, aun así, su tamaño no va más allá de cierto límite por las obvias razones logísticas citadas. De ahí, que aquello de “ropa falsificada”, si bien es un fenómeno tangible, debe ser reformulado y debidamente reevaluado. Hay, en efecto, “talleristas” bolivianos –sobre todo los mas autónomos- mas especializados en el “truchaje” que se comercializa en La Salada y en sus ferias tributarias; pero muchas veces, estos no son sino versiones económicas de grandes marcas que producen artículos de mayor calidad en los mismos talleres, o bien que suman a la cadena un eslabón mas consistente en la inscripción de la marca. También, vale aclarar una diferencia: a veces en un taller se puede imprimir a prendas de la misma calidad la misma marca, aunque las mas fidedignas son vendidas en los sectores medios y altos en los grandes *shopping*; mientras que otros sellos, que lo son menos, venden su producto de la misma calidad a precios ostensiblemente menores en La Salada a consumidores populares o de clase media baja. La diferencia,

⁹ Ver “Donde están y como funcionan los talleres de costura clandestinos”. Buenos Aires. Cooperativa “La Alameda” y Unión de Trabajadores Costureros, abril de 2006. Este documento fue entregado por los representantes de estas instituciones al Departamento de Asistencia a la Víctima de la Procuración General de la Nación, y al Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

entonces, solo estriba en la presencia o no de la marca –colocada también en talleres especializados- o en la diferente calidad.

La estrategia territorial

Las reglas de juego de esta modalidad de explotación semiservil y esclavista –por cierto, mucho más rigurosa que la de los pintores y albañiles paraguayos, solo equiparable, en todo caso, al de la prostitución adolescente-, sin embargo, son aceptadas por la mayoría de los inmigrantes del altiplano por considerarlas el precio natural de su “derecho de piso”. Así, solo una minoría denuncia las condiciones infrahumanas de los talleres en las nuevas instituciones mutuales fundadas durante los últimos años mayormente por militantes de partidos de izquierda. Muchos, aspiran –y algunos lo logran- a convertirse en “talleristas” o tratantes como vía de ascenso; aunque esta suele estar también garantizada por otras actividades legales o ilegales. El negocio de las ferias y de los talleres se inserta, entonces, en un conjunto más vasto que abarca la horticultura, la construcción; y más recientemente, al tráfico de pasta base para la fabricación de cocaína que ingresa en el país a través de pistas de aterrizaje clandestinas diseminadas en las provincias argentinas del noroeste, limítrofes con Bolivia. Es sumamente difícil tomar contacto con ese circuito por obvias razones. Pero lo cierto es que, como los referentes paraguayos “stronistas”, se han instalado en un curso encadenado de zonas de asentamientos y villas que se extiende desde Budge hasta la estación Buenos Aires situada en el corazón de la Capital Federal, y que tiene por eje, en Lomas de Zamora y Lanús, la línea ferroviaria Belgrano Sur que parte de Valentín Alsina y llega hasta González Catan, en La Matanza. Su zona más concentrada se halla, de todos modos, en los asentamientos de Ing. Budge; en donde los inmigrantes bolivianos, peruanos y, en menor medida, paraguayos han desplazado y enclavado a los primigenios ocupadores argentinos. Es bastante fácil observar las sutiles fronteras entre estas colectividades en el interior de esa localidad debido a que mientras los peruanos y bolivianos construyen edificios y chalets de material de hasta tres pisos de altura, los paraguayos lo hacen en otros más chatos y menos ornamentados.¹⁰ La ola de ocupaciones comenzadas en 2006 ha engrosado esta sucesión de barrios en los asentamientos del denominado Campo Tonghi; tal vez, uno de los más extensos de América Latina, de contornos aun imprecisos. El cinturón peruano-boliviano se estrecha en Villa Fiorito en la villa La Isla para volver a cobrar una consistencia –aun así, incomparable respecto de la de Budge- en los asentamientos lanusinos de Villa Jardín, El Triángulo, Villa Ilaza, el Barrio Pampa hasta el puente Alsina. Prosigue cruzando el Riachuelo por el abandonado “puente de los ciento veinte escalones” para ingresar luego en la Capital Federal a través de la Villa Zabaleta, la 1.11.14; y la 21. Allí se vertebra, nuevamente, con un eje ferroviario: el del ferrocarril Roca ni bien cruza el Riachuelo a la altura de Avellaneda; y desde la estación de cargas Sola, próxima a la terminal de Constitución, se conecta con la citada estación Buenos Aires en el barrio porteño de Barracas. No obstante, los asentamientos bolivianos constituidos en esta última terminal, así como los intentados a la vera de las vías de la Línea

¹⁰ Es llamativo destacar, en cambio, que la mayoría de los argentinos, en cambio, son divisables por permanecer en sus rudimentarias viviendas “villeras” de los primeros tiempos.

Roca fueron desalojados por las fuerzas de seguridad luego de descubrir su entramado secreto que conecta a sucesivos núcleos delictivos que virtualmente gobiernan las villas a la vera del Riachuelo de la Capital Federal; aunque todos los caminos finalmente confluyan en el núcleo central de La Salada. La minoría que procura el ascenso por este sendero, en principio, intentan subordinándose a las redes de traficantes consolidados. El “*cursus honorum*” comienza con la labor de la “transa” domiciliaria en la que suele participar toda la familia; ascendiendo, luego, sucesivos escalones y llegando, en algunos casos -cuando logran sobrevivir- a ser jefes. De todos modos, en el conjunto de inmigrantes andinos estos constituyen una ínfima minoría.

Luego de etapa esclavista -que dura entre seis meses y un año- los inmigrantes ensayan intentan insertarse en los demás circuitos. Como en el caso de los paraguayos, en principio, logran alojamiento como inquilinos en propiedades que, en muchos casos, pertenecen a los propios tratantes en precarias viviendas mayormente en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores; o en los barrios de Ing. Budge Los trabajadores, luego, se ofrecen en una de las plazas del asentamiento para ser contratados en diversos oficios como obreros de la construcción, eventualmente plomeros y electricistas. Los más osados aprovechan sus vínculos familiares con horticultores diseminados en los partidos del sur y del norte del Gran Buenos Aires. Su disposición al trabajo ímprobo determina que sus objetivos de ascenso se cumplan en muchísimos casos, desempeñándose en distintas actividades como la venta de comidas regionales típicas, o la citada horticultura en donde registran una presencia muy concentrada en quintas del norte bonaerense o del este de la zona sur del Conurbano como Quilmes, Berazategui o Florencio Varela. Pero de lograr sus aspiraciones se yergue sobre ellos un nuevo peligro: pasan a ser objeto de los ataques extorsivos de mafias locales que los convierten en sus víctimas dilectas debido a una mansedumbre bien distinta respecto de otras comunidades más aguerridas, pese a estar más informalmente reorganizadas como la paraguaya. Otros, sin embargo, fracasan en sus metas; aunque, aun así, prefieren radicarse en villas y asentamientos locales que a retornar a sus países, desempeñándose en actividades marginales como el “cartonerismo”.

REFLEXIONES FINALES

La coyuntura histórica de los últimos veinte años articuló varios procesos superpuestos que aceleraron la confluencia de contingentes inmigratorios, y la dotaron de toda una serie de especificidades económicas, políticas, y culturales. Tales son los casos de la integración regional supuesta por el MERCOSUR, la culminación de la reestructuración económica comenzada a mediados de los 70, la consiguiente reorganización social, los procesos de democratización de los tres países; y las nuevas formas de intervención del Estado y del sistema político en la sociedad. Las nuevas formas de inserción de las colonias inmigratorias en la zona aquí analizada requirieron de organizaciones micropolíticas que facilitaron tanto su disciplinamiento respecto de las actividades económicas que demandaban su fuerza laboral como su articulación con los sectores populares locales y sus mandantes políticos.

Los paraguayos se concentraron en una actividad, como la construcción, compartida por el sector público y el privado de la economía; registrándose entre ambas una verdadera división del trabajo. Mientras que el primero tendió a utilizar mano de obra de origen local según los criterios precedentes, en parte, de la economía formal clásica y de las políticas focalizadas de subsidio a los desocupados; las empresas constructoras privadas,

fuertemente vinculadas con facciones políticas burocráticas, recurrieron a intermediarios paraguayos. En torno de estos últimos, apareció una nueva generación constituida por referentes procedentes del depuesto régimen del gral. Alfredo Stroessner que conjugaron una nueva estrategia de organización política territorial en áreas de los nuevos asentamientos suburbanos de acuerdo a sus criterios militaristas residuales. Asimismo, establecieron vínculos tensos pero eficaces con los referentes de la política territorial local y con organizaciones delictivas cuya rentabilidad terminó siendo tan relevante como el “core business” primigenio. Tales fueron el robo de partes y de vehículos destinados al Paraguay; la importación y comercialización de la marihuana; la prostitución; y la especulación inmobiliaria informal. En todos los casos, contaron con la aquiescencia de autoridades políticas y burocráticas asociadas a sus lucros que, a su vez, les demandaban la movilización electoral de sus subordinados.

Los bolivianos, en cambio, definieron un ecosistema mucho más complejo cuyas expresiones más acabadas fueron el complejo ferial de La Salada., y la producción de textiles falsificados; ambos, íntimamente asociados. A diferencia de los paraguayos, los bolivianos debieron compartir los beneficios de su nueva y original inserción en la zona analizada con referentes locales asociados a la política comunal. La feria boliviana, a poco de su creación, debió tolerar la competencia de otras tres: una, argentina –que terminó ejerciendo el liderazgo en todo el complejo-; otra mixta, también formal; y una boliviana, informal. De forma análoga al caso paraguayo, se registró una división de tareas. Así, las formales priorizaron su relación con el complejo textil a través de un conjunto de empresas pequeñas y medianas -sobrevivientes o resucitadas a partir de los 2000- y con el trabajo femenino domiciliario regentado por referentes políticos territoriales; en ambos casos, con mano de obra preferentemente local. La informal, en cambio, lo hizo -en mayor medida que las otras- con intermediarios bolivianos distribuidos en diversos talleres especializados más o menos autónomos respecto del sector mercantil y de las grandes empresas formales a las que también abastecen de productos solo diferenciados por el valor definido por las marcas. Estos talleres operan con mano de obra semiservil abastecida por otros intermediarios, directa o indirectamente conectados con sus responsables a través de un complejo sistema de reclutamiento y tráfico clandestino de personas desde su país de origen. También, en el caso boliviano, se observa una estrategia de implantación territorial; aunque, a diferencia de los paraguayos, mucho más compleja, en torno de las grandes ferias. Estos territorios coordinados no hicieron más que expandirse durante los últimos años. Los talleres, en cambio están diseminados en distintos la Capital y el Gran Buenos Aires aunque, obviamente, coordinados entre sí. Su grado de dependencia respecto de los referentes políticos locales es más estrecha y defensiva que la de los paraguayos por múltiples razones de índole cultural sobre las que no hemos profundizado.

Pese a las trampas, humillaciones y diversos tipos de expoliación a los que son sometidos estos contingentes migratorios -particularmente, durante su etapa inicial- la mayoría registra, sin embargo, niveles de ascenso social mucho más tangibles que los de la población popular local. Solo una minoría, asimismo, está involucrada en actividades delictivas regentadas por sus jefes; aunque lo suficientemente poderosa como para seguir ejerciendo los liderazgos comunitarios y operar como fuerza motriz de todo un sistema de tráfico de personas que, luego, se distribuyen en un espectro de actividades mucho más amplio.

BIBLIOGRAFIA

AROCENA, José; El desarrollo local: un desafío contemporáneo. Montevideo. Editorial Santillana, 2002.

BENENCIA, Roberto; De peones a patronos. Movimiento social de familias bolivianas en la periferia bonaerense. En “Estudios Migratorios Latinoamericanos” N° 35. Buenos Aires, abril de 2000.

BERGALLI, Roberto, y RIVERA BEIRAS, Iñaki; Emergencias urbanas. Barcelona. Anthropos-OSPD, 2006.

CARPIO, Jorge, KLEIN, Emilio, y NOVACOVSKY, Irene; Informalidad y exclusión. Buenos Aires. FCE-SIEMPRO, OIT, 2000.

CASTEL, Robert; La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del asalariado. Buenos Aires. Edit. Paidós, 1997.

Castel, Robert; Vulnerabilidad social, exclusión: la degradación de la condición salarial. En Carpio, J. y Novacovsky, I. (comp.) De igual a igual. El desafío del estado ante los nuevos problemas sociales. Buenos Aires. FCE, 1999.

CLARIN. Mi Partido: Lomas de Zamora y Almirante Brown. Buenos Aires, 1998.

CORAGGIO, José Luis; Economía popular y políticas sociales. El papel de las ONG. Quito. Instituto Fronesis, 1994.

CORAGGIO, Jose Luis; Una alternativa socioeconómica necesaria: la economía social. En Danani, Carlos (comp.), Política social y economía social. Debates fundamentales. Buenos Aires. Altamira, 2004.

CRAVINO, María Esther; Las villas de la ciudad.. Mercado e informalidad urbana. Buenos Aires. UNGS, 2005.

DANANI, C. (Comp.): Política Social y economía social. Debates fundamentales. Buenos Aires. Altamira, 2004.

DE SOTO, Hernando; El otro sendero. Santiago de Chile. Edit. Sudamericana, 1987.

FUNDACION “EL OTRO”: “El sector textil de indumentaria desde la perspectiva de genero”; “Quien es quien en la cadena de valor de industria indumentaria textil” y con la Cooperativa “La Alameda”, “Donde están y como funcionan los talleres de costura clandestinos”.

GRIMSON, Alejandro (comp.); Frontera, Nación e Identidades. La periferia como centro. Buenos Aires. Cicus-La Crujía, 2000.

GRIMSON, Alejandro y JELIN, Elizabeth; Migraciones regionales hacia la Argentina. Diferencia, desigualdad y derechos. Buenos Aires. Edit. Prometeo, 2006.

MALIMACCI, Fortunato y SALVIA, Agustín (comp.); Los nuevos rostros de la marginalidad. La supervivencia de los desplazados. Buenos Aires. Edit. Biblos, 2005.

MINUJIN, Alberto y KESSLER, Gabriel; La nueva pobreza en la Argentina. Buenos Aires. Planeta, 1995.

SALVIA, Agustín y CHAVEZ MOLINA, Eduardo; Sombras de una marginalidad fragmentada. Aproximaciones a la metamorfosis de los sectores populares de la Argentina. Buenos Aires. Miño y Davila Ediciones, 2008.

SARAVI, Gonzalo A. (Editor); De la pobreza a la exclusión. Continuidades y rupturas de la cuestión social en America Latina. Buenos Aires. Edit. Prometeo, 2006.

SCHVARZER, Jorge; Implantación de un modelo económico. La experiencia argentina entre 1975 y 2000. Buenos Aires. A-Z Editora, 1998.

